



La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Una revisión a la objeción de conciencia como derecho fundamental en Colombia a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Janeth Prieto.¹

Resumen.

La objeción se erige como una prerrogativa fundamental de carácter innominado, es decir, que no se encuentra regulada a través del derecho positivo, pero que ha sido desarrollada por parte de la Corte Constitucional y que se deriva como consecuencia del pleno ejercicio del derecho a la libertad de conciencia (Art. 18). A su vez, se entiende como un derecho que se encuentra estrechamente ligado a la libertad de culto (Art. 19) y a la libertad de pensamiento (Art. 20), todos estos, establecidos por la Constitución Política de Colombia.

De igual manera, la objeción de conciencia implica la protección de otros derechos fundamentales como lo son la libertad (Art. 13), la autonomía personal, que es lo mismo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16) y la dignidad de la persona. Por consiguiente, el Estado debe brindar el amparo necesario y la garantía eficaz para que los individuos puedan gozar de este precepto y no sean obligados a actuar de forma contraria a sus convicciones; aun, cuando parezca que su ejercicio pueda colisionar con normas públicas y abstractas de obligatorio cumplimiento.

Palabras clave: Objeción de conciencia, Libertad de culto, Libertad de pensamiento, Praxis médica, Servicio Militar, Libertad de decisión.

¹ Estudiante de la Universidad Católica de Colombia, facultad de derecho, programa de pregrado. Artículo reflexivo para optar al título de abogada. Director: Dr. Ricardo Saavedra.

A review of conscientious objection as a fundamental right in Colombia based on the jurisprudence of the Constitutional Court.

Janeth Prieto.

Abstract.

The objection is raised as a fundamental prerogative of an unnamed character, that is, that is not regulated through positive law, but that has been developed by the Constitutional Court and that is derived as a result of the full exercise of the right to freedom of conscience (Article 18). In turn, it is understood as a right that is closely linked to freedom of worship (Article 19) and freedom of thought (Article 20), all these, established by the Political Constitution of Colombia.

Similarly, conscientious objection implies the protection of other fundamental rights such as freedom (Article 13), personal autonomy, which is the same as the right to the free development of personality (Article 16) and dignity of the person. Therefore, the State must provide the necessary protection and effective guarantee so that individuals can enjoy this precept and not be forced to act contrary to their convictions; even, when it seems that its exercise may collide with public and abstract standards of mandatory compliance

Keywords: Conscientious objection, Freedom of religion, Freedom of thought, Medical Praxis, Military Service, Freedom of decision.

Sumario.

Introducción. **1.** La objeción de conciencia como derecho fundamental en Colombia: noción, características y elementos que la componen. **1.1.** Objeción de conciencia en el ámbito militar. **1.2.** Objeción de conciencia en el ámbito de la medicina. **2.** La objeción de conciencia frente a otros derechos fundamentales. **3.** La libertad de culto en Colombia. **4.** La objeción de conciencia en la jurisprudencia colombiana. Conclusiones. Referencias.

Introducción.

El derecho a la objeción de conciencia se erige como una prerrogativa de gran trascendencia que influye dentro de los distintos aspectos, situaciones y acciones que ejercen los individuos a través de sus profesiones o de diversos actos que se encuentren descritos por ley como mandatos de obligatorio cumplimiento al interior de la sociedad colombiana; esto es, médicos, militares, y en general, cualquier persona que se vea obligada a ejecutar una acción con la que sus creencias, valores y demás elementos propios, intrínsecos y personales no concuerden, coincidan ni armonicen.

Es por ello, que la objeción de conciencia se convierte en un presupuesto indispensable que permite garantizar que ningún individuo sea obligado a actuar de forma contraria a como lo dictan sus valores y convicciones personales, fundándose en el respeto por la dignidad humana, la autonomía, la libertad y las creencias morales y valores propios de cada persona, así dicha obligación se encuentre estipulada por la norma general y abstracta.

Por lo tanto, es perentorio analizar lo que se ha establecido a través de la jurisprudencia de las altas cortes, en especial, al interior de las decisiones judiciales emitidas por la Corte Constitucional con el fin de revisar la manera como se protege, salvaguarda y se garantiza el goce de este derecho en Colombia y así mismo, evidenciar cuáles son las características y elementos naturales que lo componen y la forma como esta prerrogativa se encuentra relacionada con la libertad de culto y con la libertad de pensamiento.

Preceptos anteriores, que un país pluricultural como lo es Colombia, se instituyen como prerrogativas fundamentales de especial protección constitucional. Puesto que, su vulneración implicaría la transgresión de un amplio catálogo de derechos emanados y salvaguardados por la Carta Política como lo son por ejemplo, la libertad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas.

Además, como ya se insinuó previamente, la objeción de conciencia tal y como lo han señalado las altas Cortes a través de su jurisprudencia, se encuentra estrechamente vinculada al libre ejercicio de la libertad de culto y de la libertad de pensamiento, prerrogativas que también son protegidas por la Constitución Política de Colombia, pues se entiende que son componentes trascendentales para el desarrollo personal de los individuos.

Es decir, que la Constitución de 1991 previó que los sujetos pertenecientes a la sociedad tienen el derecho irrenunciable a manifestar sus ideas de forma libre y sin coerciones y a practicar el culto religioso con el que encuentren afinidad moral, paz y tranquilidad, lo que trae como consecuencia, que los individuos desarrollen normas morales internas que deben ser respetadas y que no se pueden transgredir al obligar a la persona a actuar contrariamente a las convicciones que le dictan su conciencia, sus creencias, su valores y su forma de pensar.

Es por esta razón, que al interior de esta investigación se presenta un cuestionamiento que se plantea de la siguiente manera: ¿cómo se puede asegurar que la objeción de conciencia al relacionarse con la libertad de culto y la libertad de pensamiento encuentra una protección eficaz al interior del ordenamiento jurídico colombiano?

Ahora bien, como objetivo general, se pretende analizar si al interior del ordenamiento jurídico colombiano y de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, se hace posible hallar instrumentos eficaces que permitan garantizar la plena protección, goce y satisfacción del derecho a la objeción de conciencia.

Por consiguiente, con el fin de desarrollar el problema jurídico planteado y el objetivo general que ha sido propuesto, la investigadora realizará una respectiva compilación de literatura jurídica comprendida por la norma, la jurisprudencia y la doctrina escrita sobre la materia, con el fin de que a través de un método analítico y descriptivo se logre evidenciar y describir todos los presupuestos que componen el derecho a la libertad de conciencia y la forma como se garantiza su protección al interior del marco normativo colombiano.

1. La objeción de conciencia como derecho fundamental en Colombia: noción, características y elementos que la componen.

La objeción de conciencia es una noción legal que no se encuentra institucionalizada o reglamentada por una norma en específico, sino que la misma, se ha venido desarrollando mediante la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, de donde se ha deducido que dicho precepto emana como consecuencia del eficaz ejercicio y de la protección del artículo 18 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se estipula que “se garantiza la libertad de conciencia”, y de forma seguida, indica que “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.

Por consiguiente, la objeción de conciencia encuentra su fundamento en el respeto por la autonomía, la libertad, y la dignidad de la persona, entendiendo que los individuos no pueden ser obligados a actuar de forma contraria a lo que su moral y sus valores le dictan como norma de comportamiento. Como bien expresó la Corte Constitucional en sentencia SU-108 de 2016:

2.4.1. La Corte resalta que la garantía de la objeción de conciencia, esto es, el derecho que tiene toda persona a no ser obligado a actuar en contra de sus convicciones descansa en el respeto, en la coexistencia de las creencias morales de cada quien y se funda en la idea de la libertad humana como principio fundamental de la ética contemporánea. En estos términos, se concibe al hombre como sujeto moral, capaz de emitir un juicio sobre un determinado comportamiento. Por ello, la libertad de conciencia incluye la facultad de emitir juicios morales internos y de actuar conforme a ellos. (Corte Constitucional, sentencia SU-108/16)

En este mismo sentido, Ortiz (1995, pp. 35-36) citado por Castrellón (2014, p. 17) expresó que:

El reconocimiento de la objeción de conciencia puede entenderse como una de las garantías más importantes que un Estado liberal otorga al desarrollo de la autonomía de los ciudadanos. Este derecho, que se deriva del derecho humano a la libertad de conciencia, “tiene como base la tolerancia frente a las facultades de pensar y obrar según la conciencia individual, dentro del entramado social que conduce a la autonomía de la persona y de ahí al pluralismo democrático de las ideas. Este conjunto de facultades y acciones constituye la dimensión básica para el reconocimiento y efectividad de la objeción de conciencia.”

Es decir, que la objeción de conciencia se torna como un elemento trascendental para la protección de una serie de derechos fundamentales, los cuales son definidos por Ferrajoli (2014) como:

(...) aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de ésta. (p. 19)

A su vez, estos derechos fundamentales se encuentran intrínsecamente relacionados con los derechos humanos, ya que estos últimos se consideran como la base primordial para que los Estados a través de sus Constituciones otorguen una serie de prerrogativas a sus ciudadanos con la finalidad, de que estos se desarrollen de forma plena dentro de la sociedad.

Situación anterior, que se facilita gracias a la concreción “de una jurisdicción constitucional independiente, el establecimiento de una acción autónoma para la protección de los derechos fundamentales y cambios en la cultura jurídica nacional (en parte

ocasionados por la recepción de nuevas teorías del derecho con circulación transnacional)” (López, 2009, P. 11).

Sobre este aspecto, Borowski (2003, p. 33) citado por Llano y Velasco (2016, p 38) indicaron que los derechos fundamentales se caracterizan “porque adquieren una dimensión positiva en las constituciones nacionales de los Estados democráticos constitucionales y que por lo general representan un intento de transformar los derechos humanos en derecho positivo”. En igual sentido lo determinó Chinchilla (2009), al expresar que “los derechos fundamentales constituyen una categoría especial de derecho pertenecientes a un sistema jurídico positivo” (p. 34).

En consecuencia, el derecho a la objeción de conciencia se erige como un elemento primordial para el desarrollo de la persona al interior de un Estado Social de derecho; puesto que, permite garantizar la protección de diversas prerrogativas que le son inherentes a todos los individuos. Es decir, que salvaguarda un determinado número de derechos humanos que “vistos desde el derecho internacional, son normas jurídicas de orden superior que operan como principios fundamentales y exigen cumplimiento obligatorio por los Estados” (Ramírez, 2017, p. 12).

Es por ello, que la objeción de conciencia encuentra una protección legal no solo a nivel jurisprudencial dentro del Estado Colombiano, sino que, además, es protegida por el Bloque de Constitucionalidad mediante el cual “se integran los tratados de derecho internacional que versan sobre derechos humanos” (Cárdenas, Cubides y Pinilla, 2016, p. 120).

Es por ello, que se hace posible encontrar referencias acerca del derecho a la objeción de conciencia en diversos instrumentos internacionales como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 18 expresa que:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

Así mismo, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones, proclamaba por la Asamblea

General de la ONU el día 25 de noviembre de 1981, en su artículo 1 replicó textualmente lo citado en el artículo anterior del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos.

Por su parte, el instrumento internacional más importante; es decir, la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, en su artículo 18 también realiza una referencia directa acerca del derecho a la objeción de conciencia de la siguiente manera:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

A su vez, y de una forma mucho más específica, la ONU se manifestó a través de la Resolución 77 de 1998, en donde estableció que:

La objeción de conciencia era un resultado necesario del ejercicio de la libertad de conciencia. En concreto, reconoció el derecho de toda persona a objetar en conciencia como consecuencia del ejercicio de todos los derechos reconocidos por la Naciones Unidas como fundamentales y el respeto a la dignidad humana. (Corte Constitucional, Sentencia SU-108 de 2016)

Por otro lado, al Interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también se hace posible encontrar en el Pacto de San José, artículo 12, una referencia directa y específica sobre este derecho así:

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

Es por lo anterior, que la objeción de conciencia se entiende al interior del marco normativo colombiano como un derecho fundamental innominado que ha sido desarrollado por la jurisprudencia de las altas Cortes, en especial, por la Corte Constitucional. Pero, que encuentra una protección directa en diversos instrumentos internacionales que han sido adoptados e incluidos en nuestro bloque de constitucionalidad.

De ahí que, se considere a la objeción de conciencia como un derecho fundamental derivado de la libertad de conciencia, el cual se encuentra plenamente relacionado con la libertad de pensamiento y la libertad de culto.

Lo que implica a su vez, que este derecho se encuentre conexo a la protección de otros derechos de categoría superior como lo son la dignidad, la libertad, la autonomía o lo que es lo mismo, el libre desarrollo de la personalidad. Esto es así, debido a que la objeción de

conciencia implica la garantía de que ningún individuo actúe de forma contraria a como lo dictan sus convicciones, así la norma se lo imponga. Como bien expresaron Barranco y Garrido (2011):

(...) la objeción de conciencia sería un mecanismo de protección de la libertad ideológica, esto es, sería “el derecho que permite el incumplimiento de obligaciones por razón de conciencia”. Mas es un derecho que no es absoluto, pudiéndose derivar de su colisión con otros derechos o con otros bienes y valores. (p. 19)

En el mismo sentido, Montoya (2014) con relación a la libertad y objeción de conciencia expresó lo siguiente:

El ordenamiento constitucional colombiano garantiza la libertad de conciencia, a partir del cual una persona no puede ser molestada con base en sus convicciones, y, en el marco de un Estado liberal y democrático de derecho, es un componente esencial. Este derecho, además, viene acompañado de la garantía en virtud de la cual todas las personas pueden adecuar su comportamiento a dichas creencias. (p. 436)

Por todo lo anterior, es que la Corte Constitucional definió a la objeción de conciencia como la:

resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito, por lo que la objeción de conciencia supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma moral. (Cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, sentencia C-728 del 2009)

En conclusión, la objeción de conciencia se define como un derecho fundamental innominado que se fundamenta en el respeto por la libertad, la dignidad y la autonomía, y que implica la garantía del individuo a no ser obligado a actuar de forma contraria a como lo dictan sus normas morales y los valores propios que ha creado internamente de acuerdo con sus convicciones y sus creencias.

Erigiéndose de esta forma, como un factor trascendental para el desarrollo de todos aquellos individuos quienes son sujetos de derechos dentro de una sociedad pluralista contenida y regulada al interior de un Estado Social de derecho, en el cual se promulga la dignidad y la libertad como estandartes de la persona humana.

Así pues, a nadie se le escapa la relevancia que desempeña en la sociedad moderna la libertad tanto para tener o practicar cualquier creencia o convicción, como para no tener o practicar ninguna creencia o convicción, para reunirse y expresar o manifestar dichas creencias o convicciones, o para desarrollar libremente la personalidad o comportarse de acuerdo con las mismas. (Celador, 2011, p. 85)

Por esta razón, a través de la objeción de conciencia le es factible a un individuo sustraerse de cumplir con una obligación impuesta por la ley, pero solo, si la misma se encuentra en

contravía a las normas morales, a los valores y a las convicciones de quien se encuentre en deber de cumplirla, y como bien lo ha explicado la Corte Constitucional, no se trata de evadir las normas nacionales, sino, de respetar los derechos individuales de cada uno. En palabras propias de la Corte:

En síntesis, el reconocimiento a la objeción de conciencia se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a la libertad de conciencia y no se constituye en una evasión al ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, toda sociedad democrática debe estar interesada en el respeto de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. No se trata de hacer prevalecer el interés de uno o unos pocos frente a muchos o la inmensa mayoría. Es un problema de calidad democrática y respeto a los derechos individuales básicos: cuando el Estado admite la objeción de conciencia de un particular, está potenciando en beneficio de toda la sociedad ese valor fundamental. (Corte Constitucional, Sentencia SU-108 de 2016)

En la misma línea, a través de la sentencia T-547 de 1993 de la Corte Constitucional se determinó que:

La ratio iuris de la libertad de conciencia es la inmunidad de toda fuerza externa que obligue a actuar contra las propias convicciones y que impida la realización de aquellas acciones que la conciencia ordena sin estorbo o impedimento. El derecho a la libertad de conciencia tiene un doble destinatario: de un lado la persona que pretende actuar conforme a su fuero interno y el deber de los demás de respetarle. No existiría una protección integral en la medida en que no se obligue a las demás personas a respetar las opiniones diferentes. (Cursiva dentro del texto)

En igual sentido, Prieto (2016, p. 6) manifestó que “se suele entender por objeción de conciencia la resistencia no violenta al cumplimiento de una norma jurídica —legal o contractual—, con base en las más íntimas, personales e irrenunciables convicciones éticas o religiosas”.

Esto quiere decir, que la objeción de conciencia representa una garantía en cuanto a la promoción de las libertades individuales en cualquiera de los escenarios en los que se desenvuelva la persona, es decir en “las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (Villaroel, 2007, p. 192).

Por lo tanto, y de acuerdo con la Corte Constitucional, la objeción de conciencia derivada de la libertad de conciencia representa una inmunidad frente a una fuerza exterior que pretenda obligar a un individuo a actuar de forma contraria a sus convicciones, así sea la misma norma legal la que se lo imponga.

1.1. Objeción de conciencia en el ámbito militar.

El servicio militar obligatorio es un deber de orden constitucional contenido en el artículo 216 de la Carta Política que especifica que “todos los colombianos se encuentran obligados a tomar las armas cuando las necesidades publicas lo exijan”. Es decir, que es un mandato general del cual solo es posible eximirse bajo las circunstancias que la ley determina.

Lo que quiere decir, que el servicio militar se presenta como una obligación impuesta por la Constitución política y que implica la existencia de unas obligaciones y deberes que tienen los nacionales colombianos en favor y en beneficio de toda la colectividad en general

Ahora bien, volviendo a las situaciones que permiten la exoneración de la obligación de prestar el servicio militar a la nación, se hace necesario aclarar que las mismas se encuentran contenidas en la ley 48 de 1993, por medio de la cual "se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización" y en cuyo título segundo, se regula todo lo concerniente a la prestación del servicio militar obligatorio. Circunstancia, que se encuentra dirigida de manera específica a los nacionales del género masculino, quienes tienen el deber legal de definir su situación militar ante las autoridades correspondientes.

Por lo tanto, tenemos, que las exenciones descritas para no prestar el servicio militar de acuerdo con lo estipulado con esta ley son: cuando la persona se encuentre en una situación de discapacidad física o sensorial permanente y también, cuando los individuos pertenezcan a comunidades indígenas reconocidas por el Estado Colombiano.

Así mismo, según la norma se encuentra exentos de prestar servicio militar obligatorio en tiempos de paz las siguientes personas: los clérigos y religiosos, los condenados a penas accesorias equivalentes a la pérdida de derechos políticos, los huérfanos de padre o madre que provean el sustento de sus hermanos incapaces de subsistir por sí mismos, los hijos de padres mayores de 60 años incapacitados para trabajar y que no tengan medios de ingresos como lo es una pensión y el hermano o hijo de quien haya fallecido en combate o en actos del servicio, entre otros. (Art. 28).

No obstante, en ninguna de las circunstancias descritas dentro de la norma se menciona que la objeción de conciencia o la libertad de pensamiento o de religión sean una causal eximente de dicha responsabilidad. Es por ello, que a raíz de muchas situaciones expuestas ante la Corte Constitucional en donde un individuo considera que de acuerdo con sus normas y valores propios e intrínsecos no tiene la obligación prestar el servicio militar, pero, la autoridad indica que sí, es que la Corporación ha podido desarrollar el derecho a la objeción de conciencia como una prerrogativa de carácter fundamental.

Convirtiéndola entonces, en una causal que le permite al sujeto sustraerse del cumplimiento de una norma de carácter general, prevaleciendo el interés particular sobre el colectivo, pero fundamentándose dicha situación en el respeto por las libertades individuales que ya se han mencionado previamente. Es por ello, que la objeción de conciencia no encuentra un soporte legal dentro del marco jurídico colombiano, sino que, se ha decantado gracias a un desarrollo jurisprudencial en donde se ha tenido en cuenta el artículo 18 de la constitución Política y los tratados que componen el bloque de constitucionalidad.

Por otro lado, vale decir que las primeras decisiones que expidió la Corte Constitucional con respecto a la objeción de conciencia como elemento eximente de la obligación de prestar el servicio militar no fueron positivas en el sentido de darle la razón al objetor, esto, a pesar de que la Corporación haya manifestado que:

(...) a partir del inalienable fuero interno de cada individuo, este goza de facultad para actuar o abstenerse de hacerlo en virtud de su razón práctica, de su pensamiento y de su íntima convicción, claro está, sobre la base, implícita en todo derecho y en toda libertad, de que sus expresiones están limitadas por los derechos de los demás y por las necesidades propias del orden público, la tranquilidad, la salubridad y la seguridad colectivas. (Corte Constitucional, Sentencia T-409 de 1992)

No obstante, a pesar de lo anterior, la Corte en la misma sentencia indicó que:

La obligación de prestar el servicio militar es desarrollo del postulado según el cual los intereses colectivos prevalecen sobre los individuales y si, además, el Estado al exigirlo no puede desconocer la igualdad de las personas ante la ley, cuyos dictados deben ser objetivos e imparciales, es evidente que la objeción de conciencia para que pueda invocarse, requiere de su expresa institucionalización dentro del respectivo ordenamiento jurídico. El servicio militar en sí mismo, es decir como actividad genéricamente considerada, carece de connotaciones que puedan afectar el ámbito de la conciencia individual, por cuanto aquel puede prestarse en diversas funciones de las requeridas para la permanencia y continuidad de

las Fuerzas Militares. (Cursiva dentro el texto) (Corte Constitucional, Sentencia T-409 de 1992)

Lo que quiere decir, que para la Corte Constitucional era necesario que a la objeción de conciencia se encontrara institucionalizada dentro del marco jurídico colombiano, para que así mismo se pudiera considerar como una circunstancia que eximiera de la obligación de prestar el servicio militar obligatorio. En palabras propias de la Corporación:

La garantía de la **libertad de conciencia** no necesariamente incluye la consagración positiva de la **objeción de conciencia** para prestar el servicio militar. Esta figura, que en otros sistemas permite al individuo negarse a cumplir una obligación como la mencionada cuando la actividad correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan con sus convicciones íntimas, no ha sido aceptada por la Constitución colombiana como recurso exonerativo de la indicada obligación. (Negrilla dentro del texto) (Corte Constitucional, Sentencia T-409 de 1992)

Por lo tanto, en dicha providencia para la Corte Constitucional el hecho de que un individuo prestara sus servicios en las fuerzas militares no implicaba que se le vulnerara su derecho a la libertad de conciencia consagrado en el artículo 18 superior, el cual no contiene de forma explícita y taxativa a la objeción de conciencia como un derecho que debe protegerse.

Sin embargo, de forma posterior la Corte modificó esta postura a través de una sentencia muy importante en esta materia, mediante la cual aclaró varios aspectos, sobre este asunto, explicando que efectivamente la objeción de conciencia si se desprende frente al servicio militar y que por el hecho de que no se encuentre institucionalizada dentro del marco normativo, no implica *per se* que el derecho no se deba salvaguardar.

No obstante, que la objeción de conciencia no es absoluta, por ende, las convicciones que la conforman deben ser profundas, reales y sinceras para que se pueda configurar como causal de exoneración de la prestación del deber jurídico que tiene el ciudadano. Por consiguiente, es un deber del legislador regular la figura jurídica de la objeción de conciencia frente al servicio militar, situación que hasta el momento no se ha realizado. En palabras propias de la Corte:

A partir de una lectura armónica de los artículos, 18 y 19 de la Constitución, al igual que del bloque de constitucionalidad, es posible concluir que de los mismos sí se desprende la garantía de la objeción de conciencia frente al servicio militar; y si bien la garantía constitucional a

partir de la cual es posible plantear objeciones de conciencia al cumplimiento de distintos deberes jurídicos, requiere un desarrollo legislativo, la ausencia del mismo no comporta la ineficacia del derecho, el cual, en su núcleo esencial, puede hacerse valer directamente con base en la Constitución. Pero las convicciones o creencias que den lugar a negarse a la prestación del servicio militar deben ser profundas, fijas y sinceras, para que sean de una entidad tal que realmente se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de religión; No puede tratarse de convicciones o de creencias que tan sólo estén en el fuero interno y vivan allí, que no trasciendan a la acción. (Cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, Sentencia C-728 de 2009).

Lo anterior, se enfatiza debido a que el legislador al estipular las situaciones que eximen a una persona de su obligación en cuanto a la prestación del servicio militar obligatorio tuvo en cuenta fue las características objetivas comunes de fácil comprobación y demostración, mientras que, con referencia a la objeción de conciencia se hace necesario establecer los criterios que determinan su naturaleza, como por ejemplo la seriedad y la profundidad para que la misma se constituya. Una situación que quizás se hace demasiado compleja y es por eso, que el congreso colombiano no ha regulado la materia.

No obstante, como bien indicó la Corte Constitucional en la sentencia que viene siendo analizada, si se llegan a presentar los presupuestos para que la objeción de conciencia se configure, es decir la seriedad de la objeción, la veracidad de esta, la cual se demuestra a través de las pruebas aportadas y la profundidad de la misma; entonces, el derecho tendría que protegerse así no se encuentre regulado por el legislador.

(...) una cosa es que las condiciones para el ejercicio del derecho deban ser definidas por el legislador, y otra que cuando se den los supuestos que, a la luz de la Constitución, le dan piso, el mismo puede ejercerse por sus titulares, aún sin que el legislador haya fijado las condiciones para ese ejercicio. (Corte Constitucional, Sentencia C-728 de 2009)

De igual forma, mediante esta providencia la Corte Constitucional subraya la conexión existente entre la objeción de conciencia y la libertad de culto, ya que dentro de uno de sus apartes indicó que:

Por otra parte, en la medida en que, a menudo, la objeción de conciencia al servicio militar está ligada a consideraciones de carácter religioso, la negativa a reconocerla afecta también la libertad religiosa y de cultos (art. 19, CP) que tiene por objeto asegurar a las personas la posibilidad de tener las creencias religiosas que se quieran, y, además, la posibilidad de adecuar sus comportamientos y actuaciones externas a los mandatos de sus creencias internas. (Corte Constitucional, Sentencia C-728 de 2009).

En conclusión, se tiene que la perspectiva actual de la Corte Constitucional frente a la objeción de conciencia enfrentada a la obligación constitucional de prestar el servicio militar obligatorio, se encuentra enfocada en el hecho de haber exhortado al congreso para que legisle sobre una situación que se hace necesaria regular, pero, si se configuran los presupuestos de cada caso en particular para que la objeción de conciencia se concrete, entonces el derecho deberá ser resguardado, protegido y garantizada su plena satisfacción al individuo que lo reclama así el precepto no se encuentre institucionalizado dentro del marco jurídico.

Por ende, las autoridades militares deberán acatar los fallos proferidos en este sentido teniendo en cuenta que la protección del derecho a la objeción de conciencia implica por conexidad una salvaguarda de un catálogo de derechos de categoría superior como lo son la libertad, la igualdad, la dignidad, la libertad de pensamiento y la autonomía de la persona.

Por su parte, los objetores de conciencia deben tener presente que este derecho no es absoluto, siendo necesario para su configuración la demostración de una serie de elementos como lo son por ejemplo, la seriedad y sinceridad de la solicitud, es decir que no se realice con el objetivo de evadir un deber legal y más específicamente su veracidad y profundidad, algo que se comprueba a través de sencillas pruebas que demostrarían el arraigo cultural o religioso del individuo y por consiguiente los valores, creencias y convicciones que de ello se deriven.

1.2. Objeción de conciencia en el ámbito de la medicina.

En el ámbito de la profesión médica, la objeción de conciencia se manifiesta en la negativa expresa que realiza el profesional de la salud para practicar ciertos procedimientos que van en contravía de lo dictado por sus convicciones”. En palabras de Silva (s. f., p. 1):

(...) se entiende por objeción de conciencia en medicina, la negativa a ejecutar un acto médico o a cooperar directa o indirectamente a su realización que, habiendo sido aprobado por las normas legales, se considera contrario a la ley moral y ética, a los usos deontológicos o las normas religiosas.

En el mismo sentido, Astete y Beca (2015) indicaron que “la objeción en el ámbito de la salud se ha definido como la negativa de los profesionales sanitarios a cooperar o a ejecutar

materialmente alguna intervención concreta que entra en colisión con sus imperativos de conciencia” (p. 494).

Ahora bien, si se observa el Estatuto de Ética Médica (Ley 23 de 1981) se puede evidenciar que la objeción de conciencia por lo menos en la práctica de esta profesión si encuentra un fundamento legal, es decir, que está institucionalizada, ya que el artículo 6 de esta norma indica que “el médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral”.

Ejemplo de estos actos o procedimientos a los que hace referencia la norma mencionada y que podrían considerarse contrarios a la moral del médico son: el aborto o interrupción voluntaria del embarazo (IVC) y la eutanasia, situaciones que de forma particular desprenden un juicio de valor que debe efectuar el galeno y que debe fundamentarse en cuestiones religiosas.

Pues la anterior, es la única opción que la Corte Constitucional le ha dejado a los profesionales de la salud para ejercer este derecho, ya que no basta la negación de realizar el procedimiento basándose únicamente en una mera opinión. Por lo menos, así se estipuló para los casos de aborto, en donde la Corporación manifestó que:

En lo que respecta a las personas naturales, cabe advertir, que la objeción de conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente fundamentada, y por tanto no se trata de poner en juego la opinión del médico entorno a si está o no de acuerdo con el aborto, y tampoco puede implicar el desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres; por lo que, en caso de alegarse por un médico la objeción de conciencia, debe proceder inmediatamente a remitir a la mujer que se encuentre en las hipótesis previstas a otro médico que si pueda llevar a cabo el aborto, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica. (Cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006)

Es decir, que actualmente todos los médicos estarían obligados a practicar la IVC y la eutanasia, salvo la excepción que se ampara en el ejercicio pleno del derecho a la objeción de conciencia motivada por cuestiones religiosas tal y como lo estableció la sentencia anteriormente citada.

Por consiguiente, esta situación hace que se genere un escenario de conflicto y contraposición entre los derechos de las mujeres en estado de gravidez, junto con los derechos de las personas que reclaman su derecho a la muerte digna Vs., los derechos de los

profesionales médicos quienes reclaman la garantía del ejercicio pleno de la objeción de conciencia cuando así lo consideren necesario.

No obstante, que tanto para el médico como para el paciente este choque de derechos no debe afectarles, puesto, que la objeción de conciencia solo se reconoce en cabeza de una persona natural, es decir, que ni las entidades públicas ni las privadas pueden negar ninguno de los procedimientos mencionados cuando se cumplan los requisitos exigidos para su configuración. En el caso del aborto, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente:

La objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo a personas naturales, de manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia. (Cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006)

Por otro lado, en el caso de la eutanasia el artículo 14, numeral 14.2 de la resolución 1216 de 2015 que reglamentó su procedimiento, establece que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben contar con profesionales idóneos y suficientes para garantizar la atención de los procedimientos en donde se solicite el amparo del derecho a una muerte digna. Es decir, que todas las EPS deben contar con profesionales no objetores y en caso tal que se presente esta situación de forma escrita y motivada por parte de un médico, la entidad deberá reasignar de inmediato a otro profesional para realizar el procedimiento.

Lo anterior es así, debido a que “la objeción de conciencia sanitaria se ha convertido en un refugio —habitualmente oculto y no siempre legítimo— ante las incertidumbres científicas y éticas que se plantean en el contexto sanitario” (Triviño, 2014, p. 18). Lo que quiere decir, que su demanda por parte del profesional médico no siempre se justifica en razón de sus convicciones y creencias religiosas.

Pero, cuando la objeción es veraz, sincera y profunda, se le deberá garantizar al profesional de la salud su derecho a ejercerla plenamente, pero al mismo tiempo se tendrá que salvaguardar el derecho del paciente. Por ende, la entidad deberá reasignar a otro profesional con el fin de proteger los derechos de ambas partes.

En consecuencia, no se podrá alegar por parte de una Entidad Promotora de Salud la objeción de conciencia con el fin de justificar la no realización del procedimiento de la

eutanasia o del IVC cuando se cumplan los requisitos dispuesto en la ley para la configuración dichas circunstancias especiales.

Lo anterior quiere decir, que la objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión médica se caracteriza por la negativa escrita y motivada que realiza un médico para ejecutar un procedimiento clínico que a su consideración se encuentra en contravía de sus convicciones morales.

No obstante, en Colombia esto no se configura como un impedimento para que los pacientes puedan recibir el tratamiento que desean con el fin de proteger sus derechos, ya que la objeción de conciencia no se reconoce en cabeza de las entidades públicas o privadas, por lo tanto, estas últimas deberán garantizar el número de profesionales no objetores con el objetivo de atender los casos en donde colisionan los derechos propios con los de los terceros.

Finalmente, debe indicarse que una vez que han sido vistas las características de la objeción de conciencia tanto en la práctica de la medicina como en el ámbito del servicio militar obligatorio, se evidencia que a pesar de que cuenta con una protección consagrada en el bloque de constitucionalidad y por vía jurisprudencial, se hace necesario para ejercer este derecho que los objetores manifiesten su “motivación en convicciones que deben revelar” (Hincapié y Mejía, 2015, p. 15).

Es decir, que se configura una situación contraría a lo que se estipula al interior de la Constitución Política de Colombia cuando en su artículo 18 preceptúa taxativamente que “nadie será molestado en razón de sus creencias **ni compelido a revelarlas**” (cursiva fuera de texto).

2. La objeción de conciencia frente a otros derechos fundamentales.

Con respecto a otra clase de prerrogativas de categoría superior, debe decirse que la objeción de conciencia tal y como lo ha explicado la Corte Constitucional, no tiene un carácter absoluto, es decir, que este precepto encuentra su límite en la Constitución misma por cuanto esta consagra otros derechos fundamentales destinados a toda la colectividad.

Es decir, que los derechos también encuentran un límite pues así lo dispone la norma superior al preceptuar que por el solo hecho de ser ciudadano también se tienen obligaciones. De acuerdo con la Corte Suprema de justicia:

(...) como ya se ha decantado ampliamente en la jurisprudencia, en particular la de la Corte Constitucional, los derechos fundamentales no son absolutos, sino que en casos concretos ellos deben ceder ante otros derechos o deberes impuestos en la norma de normas; ello en procura de una armonía que permita el desarrollo de cada una de las personas dentro del marco de un Estado Social de Derecho. (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 12 de febrero de 2009)

De forma similar, la Corte Suprema de Justicia en sentencia STL-751-2017, se refirió al carácter no absoluto de la objeción de conciencia en los siguientes términos:

En tal sentido, se tiene tal figura, opera cuando un individuo se opone al cumplimiento de un deber legal, cuyo obedecimiento quebranta sus convicciones religiosas, políticas, filosóficas o morales; sin embargo, su aplicación no es absoluta, en la medida que no se puede desconocer el ordenamiento jurídico. (Corte Suprema de Justicia, Sentencia STL-751 de 2017)

Pero igualmente, su vulneración y no reconocimiento genera también la transgresión de otras prerrogativas tal y como se ha señalado anteriormente dentro de esta revisión. Por consiguiente, se hace necesario establecer los elementos, características y factores propios y que sean comunes a la objeción de conciencia para que la misma se pueda concretizar y no sea utilizada como una forma de evadir unos deberes impuestos por la Constitución y por la ley, situación que puede generar una infracción a los derechos de terceros.

Un ejemplo claro de ello, es el de la objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión médica, en donde se hace factible violentar los derechos de las mujeres en estado de gravidez y el de las personas que reclaman su derecho a una muerte digna, y de igual manera, si no se le reconoce al médico su derecho a la objeción de conciencia, entonces se le quebrantarían sus derechos a la dignidad, libertad y a su autonomía.

Por fortuna, en este aspecto la norma ha sido clara al establecer que de todas formas la objeción de conciencia solo se reconoce en cabeza de personas naturales, en consecuencia, las personas jurídicas que prestan los servicios médicos deberán contar con un número amplio de médicos no objetores de conciencia con el fin de que se realicen los procedimientos aprobados y ordenados so pena de incurrir en sanciones que pueden ser impuestas por el Ministerio de Salud.

Sin embargo, con respecto al servicio militar aún no se regula nada al respecto, siendo necesario estudiar cada caso en particular, además, que se hace perentorio establecer un debate acerca de si la objeción de conciencia debe reconocerse con respecto a todo lo que representa el servicio militar, o si, por el contrario, se podría reconocer con respecto a una o

varias de las situaciones que lo componen. Es decir, que, si una persona de acuerdo con sus convicciones no puede portar, ni utilizar armas, bien podría ejercer otro tipo de actividades dentro del servicio militar.

Esta forma de reconocimiento de la objeción de conciencia es bien recibida en muchos Estados, siendo una manera justa de equilibrar los derechos e intereses individuales con los colectivos y, por lo tanto, no entrarían en confrontación derechos propios con los de terceros ni tampoco se verían afectados los intereses colectivos como por ejemplo la paz, precepto que se puede proteger a través de la seguridad que se hace posible garantizar si los colombianos cumplen con su deber de prestar el servicio militar obligatorio.

3. La libertad de culto en Colombia.

La libertad de culto y de religión es una cuestión que ha venido evolucionando a lo largo de la historia, en donde se ha presentado como un tema sensible debido a la pasión con la que el asunto ha sido tratado durante años; teniendo en cuenta, que la religión ha sido por muchos años la inspiradora y la guía de los comportamientos humanos y la respuesta a muchas inquietudes existenciales que se le presentan a los individuos. Es por ello que “la lucha por la libertad religiosa ha sido constante durante siglos y ha originado innumerables y trágicos conflictos (MinInterior, 2015, p. 17).

Ahora bien, en Colombia la libertad de culto se gestó a partir de la Constitución de 1991 que en su artículo 19 estableció que “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”. Por lo tanto, se pasó de un Estado Confesional a un Estado Laico, “esta aconfesionalidad del Estado, en materia religiosa, implica que el Estado no puede emitir juicios de valor sobre cuestiones religiosas (Lemus, 2016, p. 582).

Además, que se erige como una obligación para el Estado el garantizar el derecho a la libertad de culto, originándose un pluralismo religioso que permite el reconocimiento y protección de todos los cultos y religiones por parte del Estado colombiano en igualdad de condiciones. Con respecto a este pluralismo religioso la Corte Constitucional en sentencia C-817 de 2011, manifestó que:

El principio de pluralismo religioso, aunque está estrechamente vinculado con el concepto de Estado laico, tiene un contenido y alcance concreto. De acuerdo con esa garantía constitucional, que se deriva del principio democrático pluralista, al igual que del derecho a la igualdad y del derecho a la libertad religiosa, las diferentes creencias religiosas tienen idéntico reconocimiento y protección por parte del Estado. Por ende, no resultan admisibles medidas legislativas o de otra índole que tiendan a desincentivar, y menos conferir consecuencias jurídicas desfavorables o de desventaja, contra las personas o comunidades que no comparten la práctica religiosa mayoritaria, bien porque ejercen otro credo, porque no comparten ninguno o, incluso, porque manifiestan su abierta oposición a toda dimensión trascendente. (Cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, Sentencia C-817 de 2011)

De lo anterior, se colige que el Estado colombiano no puede favorecer a ninguna religión por encima de otra, sino que, por el contrario, deberá promover la libertad de culto a través de la protección igualitaria y del fomento de las diferentes creencias que se practican en el país.

Es así, como el legislador reglamentó esta situación a través de la ley 133 de 1994 en donde se manifiesta que “ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial” (Art.2). Así mismo, se reconoce la diversidad de creencias (Art. 3) y se garantiza la libertad de religión y de culto a través de la protección de los derechos a profesar de manera libre o no profesar ninguna creencia, de practicar de forma individual o colectiva, en privado o públicamente actos de oración y culto, de no ser obligado a prácticas, actos de culto o recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales, entre otras circunstancias más que son establecidas en el artículo 6.

Siendo entonces, Colombia uno de los países pioneros en la reglamentación de la libertad de culto como un derecho fundamental. De acuerdo con Picó (2015):

En los últimos años, afirmando esta información, varios países de la región han concluido procesos legislativos que han dado por resultado sendas legislaciones en materia de reconocimiento jurídico del fenómeno religioso, particularmente en lo que a constitución jurídica de las entidades religiosas y tutela de la libertad religiosa se refiere. Así, destacan los casos de Colombia, Chile y México. (p. 454)

En la misma línea, Escobar (2017) expresó acerca de la libertad religiosa en Colombia lo siguiente:

A partir de la Constitución de 1991, el derecho a la libertad religiosa en Colombia se encuadra en el esquema de derechos humanos fundamentales, que de acuerdo con los instrumentos, convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos se encuentran consolidados en dos sistemas generales de protección, uno de carácter universal y otro de carácter regional. (p. 127)

Lo que implica, que al igual que como ocurre con la objeción de conciencia, la libertad de religión y de culto se entiende como un asunto de orden universal que es protegido por diversos instrumentos, gracias a que se trata de un derecho inalienable e inherente de cada individuo el cual debe ser protegido de forma eficaz por parte de todos los Estados; puesto que, su transgresión vulneraría por conexidad otros derechos de categoría superior como lo son, la igualdad, la dignidad y la libertad de la persona.

Como bien expresó Porras (2013, p. 2), “una libertad de profesar y manifestar cualquier clase de ideas y creencias, por parte de los individuos y colectivos sociales, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.

Por consiguiente, se comprende que la libertad de culto se entiende como un derecho fundamental y como parte de los derechos humanos, por ende, es una prerrogativa que se encuentra salvaguardada por los instrumentos internos y externos del Estado colombiano. Pero, a diferencia de la objeción de conciencia, la libertad de culto y de religión si se encuentra institucionalizada al interior del ordenamiento jurídico, siendo entonces mucho más eficiente la forma en como la misma puede ser garantizada sin tener que acudir a acciones constitucionales para el reconocimiento de este derecho.

4. La objeción de conciencia en la jurisprudencia colombiana.

Como ya se ha podido dilucidar a lo largo de esta investigación, la objeción de conciencia ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de las Altas Cortes, hasta al punto de ser considerada como un derecho fundamental innominado que debe protegerse de forma eficaz, lo anterior, con la finalidad de salvaguardar múltiples prerrogativas de categoría superior que se encuentran conexas a este precepto.

Es así, como se hace posible encontrar un buen número de pronunciamientos que desarrollan el concepto, tal y como lo es, por ejemplo, la sentencia T-409 de 1992, emitida por la Corte Constitucional, que en primer lugar se refiere a la libertad de conciencia como:

La facultad que tiene una persona para actuar en determinado sentido, o para abstenerse de hacerlo, se ve determinada en grado sumo por sus convicciones, por su propia ideología, por su manera de concebir el mundo. Tales convicciones e ideología son el producto de su formación académica, social, moral y religiosa, la cual condiciona al individuo imponiéndole modelos de comportamiento a seguir en medio de la sociedad a la cual pertenece y encauzando

el ejercicio de su libertad, la cual, por eso mismo, pierde desde el comienzo su carácter absoluto. (Corte Constitucional, Sentencia T-409 de 1992)

No obstante, para la Corte Constitucional la libertad de conciencia consagrada en el artículo 18 superior, no institucionalizaba por sí misma a la objeción de conciencia y, por lo tanto, no podía ser reconocida como una causal legítima para resistirse a obedecer un imperativo legal. En palabras de la Corporación:

Es evidente que la objeción de conciencia para que pueda invocarse, requiere de su expresa institucionalización dentro del respectivo ordenamiento jurídico. Es decir, las autoridades no pueden admitirla sin estar contemplada su posibilidad ni fijadas en norma vigente las condiciones dentro de las cuales ha de reconocerse; hacerlo sin ese fundamento en casos específicos representaría desbordamiento de sus atribuciones y franca violación del principio de igualdad, aparte de la incertidumbre que se generaría en el interior de la comunidad. (Corte Constitucional, Sentencia T-409 de 1992)

En la misma línea se dictó la sentencia C-511 de 1994, en donde la Corte Constitucional expresó con respecto a una demanda de inconstitucionalidad de la Ley 48 de 1993, “por medio de la cual se regula el servicio militar obligatorio”, que:

Tampoco resulta violatoria la normativa acusada por omisión a la libertad de conciencia consagrada en el artículo 18 de la Carta. Esta Corporación ha tenido oportunidad de indicar, que no existe en nuestro régimen relacionado con el servicio militar la figura de la "objeción de conciencia", por cuanto no resulta del fuero propio de las exigencias del servicio militar el autorizar a los ciudadanos para no atender este deber esencial, cuyos basamentos se encuentran no sólo en lo dispuesto en la ley sino justamente en la conciencia del propio compromiso social. (Cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, Sentencia C-511 de 1994)

Igualmente, en la sentencia C-561 de 1995 de la Corte Constitucional también se declaró la constitucionalidad de dicha ley frente al argumento de la objeción de conciencia, indicando que prestar el servicio militar “es una obligación de naturaleza constitucional que corresponde a exigencias mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda del orden institucional y el mantenimiento del orden público”.

De igual manera, en Sentencia T-363 de 1995, la Corte Constitucional manifestó que:

Si bien una persona no puede ser obligada a actuar contra su conciencia, en garantía de la libertad correspondiente, ésta no es absoluta y, por el contrario, tiene claros límites relacionados con el interés general, lo cual significa que las propias convicciones no pueden invocarse como excusas para el cumplimiento de deberes que el Estado impone a todos por igual y que objetivamente considerados no implican prácticas o actuaciones susceptibles de ser enfrentadas a la conciencia individual. (Cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, Sentencia T-363 de 1995)

Por lo tanto, para la Corporación en estos primeros pronunciamientos exigía la institucionalización de la objeción de conciencia dentro del ordenamiento jurídico colombiano con el fin de poderla reconocer como causal de resistencia a la prestación y cumplimiento de una obligación general enfocada en la seguridad de la nación, tal y como lo es la prestación del servicio militar.

Por otro lado, aunque en la sentencia C-740 de 2001 de la Corte Constitucional la Corporación mantiene la misma línea de las sentencias citadas previamente, se genera sin embargo, un hecho que abre la puerta un cambio futuro en cuanto a la línea jurisprudencial, dicha situación se presenta gracias al salvamento de voto realizado por la Magistrada Martha Victoria Sáchica Méndez, quien en sus argumentos expone que al congreso:

(...) le corresponde regular lo relativo a la prueba y al procedimiento en los casos anteriores para garantizar que las objeciones serias sean adecuadamente valoradas y las carentes de fundamento descartadas. El derecho a la objeción de conciencia protege un ámbito valorativo del individuo constitutivo de su autocomprensión y de su orientación vital. Es así como para un practicante de ciertas confesiones religiosas, para un agnóstico o para un pacifista la imposición del deber de jurar la bandera, de asistir al culto religioso castrense o de empuñar las armas contra otros seres humanos puede significar la grave afectación de concepciones de mundo que la Constitución valora y desea proteger. Preferirán, algunos, ayudar a sus congéneres prestándoles socorro en condiciones de alto riesgo. Otros prestarán servicios médicos o administrativos. Otros servicios sustitutos fuera de la institución castrense. En fin: el legislador podría precisar los efectos de admitir la objeción de conciencia en cada caso para evitar la simple evasión o el incumplimiento de un deber constitucional. (Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2001).

Lo citado con anterioridad, representa un exhorto al legislador para que regule la objeción de conciencia, puesto que la misma se configura como un precepto que salvaguarda derechos fundamentales. Una situación que se observará en futuras sentencias sin que hasta el momento el congreso haya cumplido con dicho imperativo u obligación.

Así mismo, las sentencias citadas con anterioridad se encontraban en la misma línea jurídica emitida por la Corte Suprema de Justicia, puesto que, basta con observar por ejemplo la sentencia del 28 de julio de 2005, expediente No. 7901 en donde esta Corporación indica que:

La objeción de conciencia no es útil para rehusar la observancia de los deberes y cargas que, en beneficio de la comunidad toda, le imponga la ley a un grupo de personas que se ubique dentro de ciertos supuestos previstos en ella. (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 28 de julio de 2005, expediente No. 7901)

Por lo tanto, es claro que, en las primeras sentencias emitidas por las altas Cortes, la objeción de conciencia no se erigía como una causal valedera para abstraerse del cumplimiento de un mandato legal que beneficie a la colectividad, primordialmente, debido a que es un precepto que no se encuentra reglamentado dentro del ordenamiento jurídico.

No obstante, como ya se mencionado dentro de esta investigación, de forma posterior la línea jurisprudencial cambió en el sentido de reconocer a la objeción de conciencia como un derecho fundamental innominado que merece ser protegido de forma eficaz.

Tal es el caso, de la sentencia C-728 de 2009 de la Corte Constitucional ya citada previamente en donde se exhortó al congreso para que regulara la objeción de conciencia puesto que la ausencia de normatividad sobre esta materia genera una omisión legislativa absoluta en virtud que a los individuos les asiste el derecho a oponerse al cumplimiento de una norma fundamentándose en sus respectivas convicciones personales. Según la Corte:

Para la Corte lo que en realidad se censura es que el legislador no haya expedido una ley que regule la objeción de conciencia en el ámbito del servicio militar, lo cual se mueve en el ámbito de una omisión legislativa absoluta, puesto que, no obstante que existe un derecho subjetivo a oponerse a la prestación del servicio militar por consideraciones de conciencia, el legislador no ha desarrollado la norma constitucional en este campo, para regular, entre otros aspectos, las condiciones en las que puede hacerse efectivo el derecho, el procedimiento para obtener su reconocimiento, la fijación de una cuota de compensación militar, o la previsión de un servicio social alternativo, no siendo posible una decisión integradora de la Corte en sede de control abstracto de normas. (Cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, Ssentencia C-728 de 2009)

De otro lado, en la sentencia T-209 de 2008 de la Corte Constitucional se puede evidenciar que en materia médica la objeción de conciencia es reconocida, pero sin que llegue a afectar los derechos de los pacientes, por ejemplo, en casos de eutanasia o de interrupción voluntaria del embarazo, bajo estas circunstancias la objeción de conciencia se reconoce solo a personas naturales y no a jurídicas. En palabras propias de la Corte:

Sin embargo, la Corte consideró, que la objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo a personas naturales, de manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia. En lo que respecta a las personas naturales, cabe advertir, que la objeción de conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente fundamentada, y por tanto no se trata de poner en juego la opinión del médico entorno a si está o no de acuerdo con el aborto, y tampoco

puede implicar el desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres; por lo que, en caso de alegarse por un médico la objeción de conciencia, debe proceder inmediatamente a remitir a la mujer que se encuentre en las hipótesis previstas a otro médico que si pueda llevar a cabo el aborto, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica. (Cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, Sentencia T-209 de 2008)

Así mismo, en sentencia T-455 de 2014 de la Corte Constitucional, la Corporación reconoce a la objeción de conciencia como un derecho fundamental que tiene fundamento supra legal, el cual debe ser reconocido sin la exigencia de que dicho precepto se encuentre regulado bajo una norma presente en el ordenamiento jurídico. En palabras propias de la Corporación:

La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio es un derecho fundamental y una causal de exención a la prestación de dicho servicio, que tienen raigambre constitucional y, por ende, supra legal, como se ha explicado en esta sentencia. Por ende, no exige una prescripción legal expresa para que tenga carácter jurídico vinculante y puede ser alegado por cualquier obligado al servicio militar, quien demuestre que por convicciones personales profundas, sinceras, continuas y exteriorizadas, tiene razones de conciencia que le impiden ejercer la actividad militar. (Cursiva dentro del texto) (Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2014)

Finalmente, se vuelve a citar la sentencia SU108 de 2016 en donde la Corte insiste en reconocer a la objeción de conciencia como un derecho fundamental que debe ser reconocido sin que se exija la existencia de una norma jurídica que la regule, no obstante, que se hace necesario que el Congreso de la República legisle al respecto. Según la Corte:

El vacío normativo actual en relación con la existencia de un marco legal que defina las condiciones y los procedimientos para su ejercicio, genera problemas en el efectivo goce y ejercicio del derecho, que obliga al objetor a acudir al juez para instaurar una acción de tutela. Sin duda, la determinación de tales reglas y condiciones corresponde al legislador como agente por excelencia de la democracia representativa. (Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2014)

Conclusiones.

Es evidente que a la luz de la jurisprudencia actual, la objeción de conciencia se reconoce como un derecho fundamental que se encuentra conexo a otra serie de prerrogativas que también tienen un carácter superior, por lo tanto, se hace necesario su reconocimiento en los diversos escenarios que involucren a los individuos, máxime, cuando exista una norma que reglamente determinada acción y que debido a las convicciones propias de la persona, se vea obligada a sustraerse del cumplimiento de aquel mandato.

Pues lo anterior, ya ha sido decantado por la Corte constitucional que como se ha evidenciado durante esta investigación, ha realizado un análisis profundo de este precepto considerando que el mismo se encuentra protegido por los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos y que hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiano, por lo tanto, no hay justificación alguna para que la objeción de conciencia no sea reconocida dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

No obstante, y de acuerdo con la revisión realizada, se logra colegir por parte de la autora que aún existe un vacío en cuanto a mecanismos legales que permitan garantizar de forma eficaz la protección, salvaguarda y garantía de satisfacción de la objeción de conciencia, la cual se relaciona estrechamente con la libertad de pensamiento y la libertad de culto. Originándose de esta forma, muchos escenarios que provocan la vulneración de este derecho.

Esto es así, debido a que no existe una norma reglamentaria que determine las características necesarias para que la objeción de conciencia se puede concretar en los diversos escenarios en los que se desenvuelven los ciudadanos, dos de ellos vistos dentro de esta investigación y que son trascendentales para los intereses colectivos, puesto que el servicio militar pretende garantizar el mantenimiento de la paz a través de la seguridad nacional y la profesión médica es indispensable para garantizar la vida digna de las personas ya que impacta directamente en su salud y bienestar.

Aunque, en cuanto a la libertad de culto si es posible remitirse a una norma en específico que garantiza la libertad de profesar cualquier tipo de creencia. Sin embargo, dicha norma no es suficiente para abarcar todo lo que la objeción de conciencia implica por cuestiones religiosas y muchos menos, por otros asuntos morales que forman parte de la convicción individual de cada persona.

Por lo tanto, se hace necesario tal y como lo indicó la Corte Constitucional que el Congreso de la República legisle al respecto con el objetivo de definir los factores comunes para que la objeción de conciencia pueda ser reconocida sin necesidad de acudir a acciones constitucionales.

Sin embargo, por el momento los objetores de conciencia pueden recurrir al precedente jurisprudencial y a lo establecido por los tratados internacionales que se encuentran incluidos

dentro del bloque de constitucionalidad colombiano. Aunque, se evidencia claramente que las exigencias que se han desarrollado hasta el momento (seriedad, sinceridad, veracidad y profundidad de la objeción) requieren ser demostradas mediante alguna prueba, lo que implica para la autora una vulneración al artículo 18 constitucional, puesto que este indica que nadie puede ser obligado a revelar sus creencias.

No obstante, se hace necesario la demostración objetiva de la objeción de conciencia con el fin de limitarla, para que de esta forma no se utilice como un medio para evadir las obligaciones que la constitución y la ley imponen. Es por ello, que quizás hasta el momento el Congreso no ha cumplido con su deber de legislar sobre este asunto, puesto que el mismo representa un problema con respecto al choque de normas y en cuanto a la colisión de derechos e intereses colectivos e individuales.

Lo que significa entonces, que el panorama no cambiara próximamente, siendo necesario seguir congestionando el aparato judicial mediante la acción de tutela, ya que este último mecanismo es el que se torna como el más eficaz e idóneo para garantizar la protección de este derecho.

Referencias.

Bibliográficas:

- Astete, C. & Beca, J. P. (2015). Objeción de conciencia en la práctica médica. *Rev. Med. Chile*, (143), pp. 493-498. Recuperado de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v143n4/art11.pdf>
- Barranco, M. & Garrido, M. (2011). *Libertad ideológica y objeción de conciencia*. Madrid, España: Editorial Dykinson.
- Cárdenas, L. E., Cubides, J. & Pinilla, J. E. (2016). *La judicialización del derecho al agua: Una visión de los estándares nacionales e internacionales y el control de convencionalidad*. En Cubides, J. (Ed.). *El control de convencionalidad (CCV): Fundamentación e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*. Bogotá, Colombia: Editorial de la Universidad Católica de Colombia.
- Castrellón, M. (2014). *La objeción de conciencia al servicio militar en Colombia: Análisis de la sentencia C-728 de 2009 y de sus efectos frente a los objetores de conciencia*. En Iturralde, M. (Comp.). *La objeción de conciencia como un derecho: estrategia jurídica para su reconocimiento frente al servicio militar*. Bogotá, Colombia: Editorial de la Universidad de los andes.
- Celador, O. (2011). *Libertad de conciencia y Europa. Un estudio sobre las tradiciones constitucionales comunes y el Convenio Europeo de Derechos Humanos*. Madrid, España: Editorial Dykinson. S.L.
- Chinchilla, T. (2009). *¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? (2ª Ed.)*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A.
- Escobar, R. A. (2017). El derecho a la libertad religiosa y de cultos en Colombia: Evolución en la jurisprudencia constitucional 1995- 2015. *Revista de Derecho Prolegómenos, Derechos y Deberes*, 20(39), pp. 125-138. Recuperado de <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/2727/2434>
- Ferrajoli, L. (2014). *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. Madrid, España: Editorial Trotta.

- Hincapié, D.M. & Mejía, O. (2015). Justicia y objeción de conciencia. *Novum Jus, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Colombia*, 2(15), pp. 11-48. Recuperado de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatonica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/918/965
- Lemus, D. (2016). *Libertad religiosa, simbología y derecho comparado*. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Llano, J. V. & Velasco, N. (2016). Derechos fundamentales: Un debate desde la argumentación jurídica, el garantismo y el comunitarismo. *Novum Jus, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Colombia*, 10(2), pp. 35-55. Recuperado de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatonica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1317/1250
- López, D. E. (2009). *El derecho de los jueces (2ª Ed.)*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A.
- MinInterior. (2015). *Libertad religiosa y de cultos. Ámbitos de aplicación práctica desde la Constitución, la ley y la jurisprudencia*. Bogotá, Colombia: Autor.
- Montoya, D. M. (2014). Mitos y realidades sobre la objeción de conciencia en la praxis médica. *Rev. Cienc. Salud.*, 12(3), pp. 435- 449. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v12n3/v12n3a12.pdf>
- Picó, J. (2015). El derecho fundamental a la libertad religiosa: Jurisprudencia y doctrina constitucional. *Estudios Constitucionales*, (1), pp. 453-462. Recuperado de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v13n1/art16.pdf>
- Porras, J. M. (Coord.). (2013). *Derecho de la libertad religiosa (2ª Ed.)*. Madrid, España: Editorial Tecnos.
- Prieto, V. (2013). *La objeción de conciencia en instituciones de salud*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A.
- Ramírez, G. (2017). *Los derechos humanos a debate. Perspectiva desde el derecho internacional*. Bogotá, Colombia: Editorial de la Universidad Católica de Colombia.

Silva, J. (Ed.). (Sin Fecha). La objeción de conciencia en la medicina. *Revista Colombiana de Cirugía*, 14(3). Recuperado de https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia/vc-143/cirugia14399_editorial/

Triviño, R. (2014). *El peso de la conciencia: La objeción de conciencia en el ejercicio de las profesiones sanitarias*. Madrid, España: Editorial CSIC.

Villaroel, R. (2007). Derechos individuales y deberes de Estado. Consideraciones bioéticas en torno al debate sobre la anticoncepción de emergencia en Chile. *Acta Bioethica*, 13(2), pp. 190-198. Recuperado de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v13n2/art06.pdf>

Jurisprudenciales:

Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-409, del 8 de junio de 1992, expediente T-125. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-547, del 26 de noviembre de 1993, expediente T-18.552. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-511, del 16 de noviembre de 1994, expedientes D-599 y D-610. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia T-363, del 14 de agosto de 1995, expedientes T-65213. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-561, del 30 de noviembre de 1995, expedientes D-875. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-740 del 11 de julio de 2001, expediente D-2218. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. Bogotá, Colombia.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 28 de julio de 2005, expediente 7901. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-355, del 10 de mayo del 2006, expedientes D-6122, 6123 y 6124. Magistrados Ponentes: Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá, Colombia.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 12 de febrero de 2009.
Magistrado Ponente: Alfredo Gómez Quintero. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-209 del 28 de febrero de 2009,
Expediente T-1673450. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá,
Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-728, del 14 de octubre de 2009, expediente D-
7685. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-817 del 1 de noviembre de 2011, radicado D-
8490. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Constitucional, Sala Novena de revisión, Sentencia T-455 del 07 de julio de 2014,
Expediente T-3.936.861 y T-4.074.693. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas
Silva. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-108, del 3 de marzo de 2016, expedientes T-
2.643.585 y T-2.652.480 AC. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Bogotá,
Colombia.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia STL-751, del 29 de marzo
de 2017. Magistrada Ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Bogotá, Colombia.